

Al menos US\$ 3.000 millones en sobornos:

Una de las mayores investigaciones contra la corrupción en América Latina se desmorona

La Operación Lava Jato, que comenzó en Brasil, reveló un esquema de sobornos que abarcó al menos 12 países. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha anulado gran parte de sus efectos.

JACK NICAS y ANA IONOVA
 THE NEW YORK TIMES

Una de las mayores operaciones contra la corrupción de la historia reciente se está borrando silenciosamente.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil está desestimando evidencias clave, anulando condenas importantes y suspendiendo miles de millones de dólares en multas de una serie histórica de casos de soborno, con el argumento de que investigadores, fiscales y jueces parciales infringieron las leyes en su voraz búsqueda de justicia.

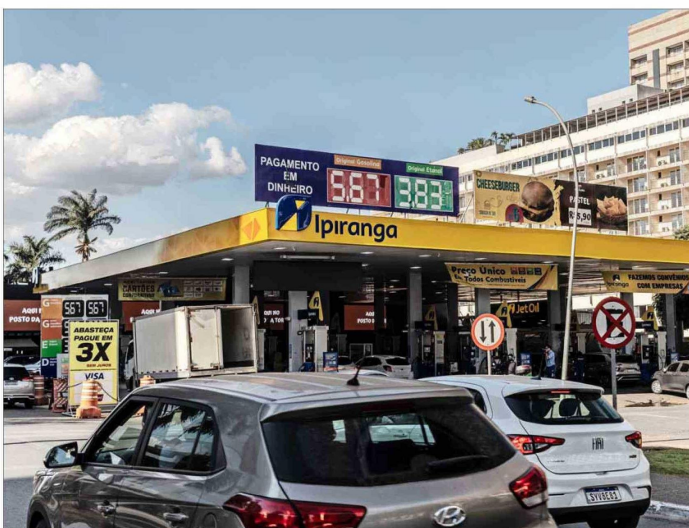
En varias sentencias dictadas a lo largo del año pasado —la mayoría derivadas de recursos interpuestos por personas que afirman haber sido tratadas injustamente— el tribunal ha anulado casos en los que altos cargos políticos y ejecutivos de empresas se habían declarado culpables.

Las decisiones están teniendo repercusiones por toda América Latina y han llevado a la anulación de al menos 115 condenas en Brasil, según los grupos anticorrupción. Las revocaciones también están sembrando dudas sobre muchos otros casos en Panamá, Ecuador, Perú y Argentina, incluidas las condenas de varios ex presidentes.

Todo ello supone un amplio desmantelamiento de la Operación Lava Jato, una amplia investigación que, iniciada hace una década, reveló una trama de corrupción que abarcaba al menos 12 países. Los investigadores descubrieron que las empresas habían pagado miles de millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos a cambio de proyectos públicos.

Los hallazgos trastocaron el panorama político de América Latina, cerrando empresas multinacionales y dando lugar a multas de miles de millones de dólares y cientos de condenas. Algunos de los políticos y ejecutivos más destacados de la región fueron enviados a prisión, incluido el actual Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Ahora, su desmantelamiento es la triste conclusión de una investigación que en su día se consideró



LA OPERACIÓN LAVA JATO obtiene su nombre del primer lugar donde se descubrió que se usaba para lavar el dinero: un lavado de autos, *lava jato* en portugués.

un cambio radical en América Latina, que prometía erradicar la corrupción sistémica que había podrido los cimientos de los gobiernos.

“Se saldrán con la suya”

La opinión pública había aplaudido las condenas como un nuevo amanecer para la región. Una década después, Brasil y otros países tienen poco que mostrar. Para algunos, este revés es otro ejemplo de la impunidad de la que han disfrutado durante mucho tiempo los gobernantes.

“Las personas que deberían pagar por sus errores o sus delitos, en cierta medida, se saldrán con la suya”, afirmó Maira Fernandes, abogada penalista y profesora del Instituto Getúlio Vargas.

Al mismo tiempo, añadió, las revocaciones no carecen de fundamento. Algunas grabaciones filtradas y otras pruebas demos-

traron que un juez y algunos fiscales se coordinaron contra los acusados, emplearon tácticas agresivas para forzar confesiones y ordenaron escuchas ilegales. “Aunque deje un sabor amargo”, dijo, “es consecuencia de una operación que se ensució las manos, que violó las reglas”.

La retórica anticorrupción

En 2018, un legislador de extrema derecha llamado Jair Bolsonaro utilizó una retórica anticorrupción para aprovechar el impulso de la Operación Lava Jato y llegar a la presidencia de Brasil. Pero su gobierno también se vio entonces manchado por escándalos de corrupción, y finalmente cerró Lava Jato cuando nuevas investigaciones comenzaron a indagar en su familia. La semana pasada, las autoridades brasileñas recomendaron presentar cargos contra él por

planear un golpe de Estado tras perder la presidencia en 2022.

La mayoría de las decisiones para revertir la Operación Lava Jato han sido emitidas por un único magistrado del STF, José Antonio Dias Toffoli. En una entrevista, Toffoli dijo que sus decisiones se basaban en sentencias anteriores de sus colegas de esa corte, según las cuales los investigadores, fiscales y jueces de la Lava Jato se habían confabulado ilegalmente, invalidando las pruebas recogidas. Dijo que se había limitado a extender esa decisión a otros casos.

“Las evidencias ilegales no se pueden utilizar para condenar”, sostuvo.

Algunos críticos, sin embargo, creen que Toffoli no debería decidir los casos. Antes de incorporarse al STF, trabajó como abogado del partido político de Lula y, más tarde, como asesor del Presidente. En 2009, Lula lo propuso para el

más alto tribunal del país. Lula y su partido fueron objetivos importantes de la investigación Lava Jato. El juez también estuvo vinculado a la investigación que ahora está desmantelando.

En 2019, Marcelo Odebrecht, el presidente ejecutivo de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción, nombró a Toffoli en una declaración a la policía sobre el esquema de corrupción de la compañía, lo que sugiere que el juez puede haber desempeñado un papel, según la prensa local.

Toffoli negó cualquier implicación y nunca fue acusado formalmente de ningún delito. “Las acusaciones son tan falsas que las partes interesadas nunca han cuestionado formalmente mi participación en estos casos”, declaró en una entrevista.

Una trama de US\$3 mil millones en sobornos

La Operación Lava Jato comenzó en 2014, cuando la policía federal brasileña descubrió una operación de blanqueo de dinero en un lavado de autos de la capital del país. Tras indagar un poco, se dieron cuenta de que se habían topado con algo mucho, mucho más grande.

Con el tiempo, los investigadores descubrieron que algunas de las mayores empresas de Brasil —incluido un grupo detrás del gigante de la carne de vacuno JBS, la petrolera estatal Petrobras y Odebrecht— habían estado sobornando a funcionarios en el poder en toda América Latina y África a cambio de lucrativos contratos gubernamentales. Se descubrió que la trama implicaba al menos US\$ 3.000 millones en sobornos, muchos de los cuales se habían blanqueado a través de sistemas como el del lavado de autos.

La operación condujo a cientos de condenas, incluida la de Lula,

entonces expresidente. Fue condenado a 12 años de prisión en 2017 por aceptar renovaciones de viviendas de empresas de construcción a cambio de favores. Lula ha negado los cargos.

Con Da Silva en prisión e inelegible para postularse, Bolsonaro ganó fácilmente las elecciones presidenciales de 2018.

Aproximadamente un año después, la Operación Lava Jato comenzó a desmoronarse.

Lula fue liberado en 2019 después de cumplir 19 meses en prisión, cuando el STF dictaminó que había sido encarcelado prematuramente. Menos de dos años después, anuló sus condenas, al fallar que el juez federal que supervisó la Operación Lava Jato, Sérgio Moro, había sido parcial.

Libre de cargos, Lula se presentó a las presidenciales de 2022 y derrotó a Bolsonaro.

Desde entonces, los reverses se han acelerado. En 2023, el STF dictaminó que otros casos, además del de Lula, se habían visto empañados por la conducta ilegal de investigadores, fiscales y jueces. Desde entonces, Toffoli se ha basado en esa decisión para una serie de sentencias de gran alcance con implicaciones generalizadas.

En septiembre de 2023, aceptó una petición de los abogados que representaban a ejecutivos de Odebrecht y anuló las evidencias del acuerdo de culpabilidad de la empresa.

Las decisiones sobre Odebrecht tuvieron un efecto dominó, poniendo en duda las condenas de políticos y ejecutivos en toda América Latina. Los abogados de otros países podrían utilizar ahora las sentencias de Toffoli para tratar de deshacer condenas de alto perfil, como la del expresidente de Perú, Alejandro Toledo, condenado el mes pasado a 20 años de prisión por aceptar sobornos de ejecutivos de Odebrecht.